



Para un pacto para los últimos 12 meses de Alejandro Toledo

Estas Fiestas Patrias marcan el inicio del último año del Gobierno de Alejandro Toledo, tiempo que será especialmente relevante y difícil, dadas las actuales condiciones del país. De ahí la importancia de reflexionar en estos días sobre los escenarios que se vislumbran; cuál sería el mejor y cuál el peor para el país; qué se le puede exigir al Gobierno, qué a la oposición y qué a los distintos sectores políticos y sociales de acá al 2006; por qué apostar y qué evitar a toda costa.

Nos guste o no, y más allá del debate sobre lo que representan, los desfiles están asociados en nuestra memoria a épocas de Fiestas Patrias. Por eso este bloque se ilustra con imágenes de "paradas" de los últimos 40 años, proporcionadas por Caretas y El Comercio.

Un escéptico camino al pesimismo

moisés lemlij

Psicoanalista

¿Qué quisiera que ocurra durante este año electoral? Que la campaña termine con la consolidación de cuatro candidaturas:

- 1) Ántero Flores-Aráoz, si logra limpiar los establos del PPC y Unidad Nacional.
- 2) Valentín Paniagua, por Acción Popular y sus aliados, si logra ponerse la camiseta de Valentín Paniagua.
- 3) Jorge del Castillo, si impone sensatez y disciplina a los compañeros.
- 4) Susana Villarán, si consigue la unión de la izquierda y calmar sus apetitos.

Tengo también dos suplentes:

- 1) Alberto Andrade, si llega a superar la efectiva demolición del aparato fujimorista.
- 2) David Waisman —sí, David Waisman—, porque creo que alguien que ha merecido la desaprobación e indignación de tirios y troyanos tiene algo que decir.

Supongo que, salvo alguna excepción, mis deseos no son realizables. Muy probablemente lo que tendremos que soportar será:

- La sonrisa vacía de Castañeda.
- La bufandita de seda de Ferrero.
- El ceceo de Olivera.

- El rostro avinagrado y matonesco de Mulder.
- Las malas compañías y el oportunismo de Lourdes Flores (lo que fue Risco, hoy es Gaby Pérez del Solar; le va a pasar lo mismo, y no aprende...).
- El silencio no enigmático de Paniagua.
- El disfraz folclórico de nuestra pareja presidencial.
- El gesto cachoso y superior de Kuczinsky (me hizo gracia que quisiera subirse al carro del Banco Mundial sumándose a la crítica a los mineros para ganarse algo).
- Pacheco con o sin bastón.
- El fascismo *light* de Barba.
- El fascismo inquisitorial de Rey.
- El cinismo y el intento de blanqueo de los fujimoristas.
- La pasada piola de los militares (ya están de vuelta).
- La pequeñez de los pequeños: Kisic, Salinas...

(Estoy seguro de que el lector podrá añadir buen número de ejemplos más.)

Pero lo que me perturba, me produce desasosiego y me rebela, es ese casi 20 por ciento del electorado que estaría dispuesto a votar por el

fujimorismo, lo que da cuenta no solo de una incurable adicción a los líderes populistas sino también de una fascinación por la deshonestidad. Esto deja el mal sabor de saber que una quinta parte de los peruanos prácticamente estimula la corrupción a la que voluntariamente se somete no solo para recibir unas migajas sino para disfrutar del espectáculo.

Cuando cayó Fujimori, parecía que habíamos llegado a un momento de quiebre. El Gobierno de transición de Paniagua y los primeros tiempos del Gobierno de Toledo parecían conducir hacia la reconstrucción del espíritu nacional. Pienso en la esperanza que generaba ver a gente como Cecilia Blondet, Nicolás Lynch, Fernando Villarán, Roberto Dañino, Gino Costa, Diego García Sayán y algunos otros en los gabinetes ministeriales. Pero fue flor de un día. De pronto surgió una suerte de fujimorismo *light*... No entiendo qué ocurrió; solo sé que se dejó pasar una gran oportunidad.

Un ejemplo paradigmático es lo sucedido con la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que cumplió magníficamente con la tarea de esclarecer lo ocurrido, de hacer que la verdad saliera a la luz. Pero sus recomendaciones para emprender el camino de la reconciliación cayeron en saco roto. Tal vez tendría que formarse una comisión con poder para ponerlas en práctica.

Otra iniciativa trunca es la del Acuerdo Nacional, aparentemente apreciado por todos y sin embargo apoyado a medias, incluso —y sobre todo— por el Gobierno que lo convocó, como

si se tuviera el temor de que realmente funcione y le quite protagonismo. Quizá sus miembros tendrían que ser más proactivos.

Cualquiera de mis candidatos, los titulares o los suplentes, o

quien sea que llegue al poder, debe incluir como ejes de su programa de gobierno estos dos pendientes fundamentales para la construcción de un proyecto nacional efectivo. Pero el oportunismo de la clase política, la torpeza de los empresarios, la

escasa influencia de los intelectuales y la falta de comunicación entre todos ellos, que parecen vivir en sus propias islas, me llevan a ser escéptico frente al futuro próximo. Recuerdo el libro de Richard Webb, *Por qué soy optimista*. Ojalá tenga razón. ■

El escenario ecuatoriano

juan de la puente

Abogado y analista político

Una de las novedades de este año previo a los comicios del 2006 es la dispersión de los partidos y opciones electorales, un fenómeno que podría ir acompañado o motivar otros: 1) una alta segmentación del voto; 2) por lo tanto, una mayor fragmentación de la nueva representación parlamentaria; 3) la imposibilidad de organizar una mayoría parlamentaria sólida; y, 4) un Gobierno débil y sin mayoría desde el inicio de su gestión.

Esta dispersión no ofrece dudas, con veintiocho partidos inscritos hasta ahora y más de diez candidatos presidenciables, lanzados o virtuales, con posibilidades de superar el récord de aspirantes (15) establecido en 1980. No obstante, otros indicadores también merecen ser tomados en cuenta.

No solo hay dispersión sino también abandono de la adhesión. Un año antes de las elecciones, las encuestas señalan que los presidenciables mejor ubicados apenas superan el

20 por ciento de la intención de voto. Un año antes de los procesos anteriores, Belaunde, García, Vargas Llosa (perdió, pero disfrutaba de una alta intención de voto) y Fujimori en 1994 y 1999, registraban intenciones de voto de alrededor del 30 por ciento. Si esta tendencia se mantiene, los candidatos que pasarán a la segunda vuelta lo harán con poco más de 25 por ciento el primero y poco más de 20 por ciento el segundo.

En esas condiciones, la primera vuelta señalaría la presencia de quince partidos en el Parlamento. Similar situación acaeció en las elecciones ecuatorianas del año 2002. El empresario bananero Noboa y el ex coronel Gutiérrez pasaron a la segunda

vuelta con poco más de 40 por ciento de votos entre ambos.

¿Por qué no despegan las candidaturas? No por falta de campaña (algunos están en ella



Revista Caretas

desde hace muchos meses), ni por ausencia de encuestas o de vida partidaria, reactivada en todo caso con la discusión de la Ley de Partidos. Dos razones-problema parecen ubicarse como centrales: 1) el poco atractivo que ejercen las candidaturas como renovación y continuidad del ciclo democrático; y, 2) la despolitización del país —entre otras razones por decepción— respecto de los temas relacionados con la democracia y su funcionamiento.

En otras circunstancias, la primera razón-problema podría resolverse con un eficaz mercadeo electoral. No obstante, es probable que estas fórmulas se revelen insuficientes si insisten en no advertir que existe un hartazgo de determinados rostros, promesas y discursos. La segunda razón-problema es más compleja: la gente es poco entusiasta con las elecciones no por vivir en Suiza o Dinamarca —y tener gran

parte de sus demandas básicas resueltas—, sino porque considera que la política peruana carece de sentido y no es un medio de satisfacción de expectativas. Aunque a más de uno no le agrade el concepto, es el resultado más grueso del fracaso de la transición democrática y el principal antecedente de la alternativa autoritaria que se abre paso en las calles o en los salones del poder.

Un fenómeno muy profundo que subyace en la falta de intención de voto de los candidatos es la creciente autonomización de la sociedad. Tanto demandas justas (aumentos de salarios, construcción de obras básicas) cuanto injustas (coca libre, no al SOAT, o contra las papeletas de tránsito) se legitiman en la calle y en los medios de comunicación, fuera de la política o con la indiferencia de los políticos. A este paso, podríamos asistir en breve a marchas de contrabandistas que exigen que los dejen "trabajar".

Un escenario electoral como el ecuatoriano, y tomando en consideración la correlación de fuerzas actuales, haría difícil la búsqueda de un acuerdo político para la segunda vuelta, obligando a los ciudadanos a votar *en contra* de una opción más que a *favor* de la otra. En estas condiciones, un triunfo en la segunda vuelta sería un problema menor para los candidatos; el verdadero desafío consistiría en la dificultad de construir una mayoría numérica en el Congreso y una mayoría política en el país.

Un Gobierno minoritario en el Congreso y débil ante el país no es la mejor opción. Al brevísimo plazo acarrearía la falta de gobernabilidad y una mayor autonomía de la sociedad. Es un camino contrario a la reforma política y la institucionalización de la democracia. La lección y el libreto ecuatorianos están a la vista: gobiernos débiles, con fragmentación parlamentaria y violencia callejera ocasionan un bloqueo institucional, primero, y un quiebre del régimen político, después.

Los partidos deberían evitar este escenario o prepararse para su advenimiento. Las más saludables de las opciones del "hoy político" son: 1) la constitución de alianzas preelectorales —para alcanzar altas votaciones presidenciales y parlamentaria en la primera vuelta—, una urgencia ante la que los líderes parecen remolonear; 2) el establecimiento de la valla del 5 por ciento de votos para acceder al Parlamento, un mecanismo que no solo obliga a los partidos a pactar sino que señala una forma de echar del sistema a los grupos muy minoritarios; 3) la eliminación del voto preferencial, auténtico veneno de los partidos y propulsor del transfuguismo; y, 4) desarrollar una campaña electoral no solo sin golpes bajos y guerra sucia sino afirmando lo que el país necesita: posiciones firmes en pocos temas de fondo; menos promesas en detalle y más compromisos de reforma y renovación política, y evitar la tentación de refundar el país cada cinco años.

Asimilemos la lección ecuatoriana: el Perú necesita desde el inicio un Gobierno legítimo, de mayoría, fuerte y con autoridad. ■



Agenda utópica

eduardo adrianzén

Dramaturgo

Los gentiles amigos de *ideele* me piden un doloroso ejercicio de reflexión que justo me pesca en una etapa muy nihilista y —al mismo tiempo— una de las más productivas de mi vida. Cómo me gustaría que mis percepciones de hoy fuesen desmentidas en el futuro, o que dentro de algunos meses digan "se le fue la mano de pesimista". Pero les confieso que últimamente no me provoca callarme lo que pienso en nombre de la medida. Por tanto, veamos.

El último año de Toledo

Se perderá hasta el más mínimo pudor. Ese grupo de oportunistas llamado "Perú Posible" buscará acomodarse y transar con quien sea y como sea para seguir medrando como congresistas o funcionarios por los siguientes cinco a cincuenta años. Lo más patético es que varios lo conseguirán.

El mejor escenario

No existe, a menos que se considere mejor el cáncer que el sida. Digamos el menos malo. Este sería: que las cosas se mantuviesen más o menos en una calma chicha, una especie de *surf* de sinvergüenzas capeando las olas, y sin llegar a extremos dementes tipo Humala, llave o severos rebrotes de Sendero.

El peor escenario

Darle las estocadas finales a la

lucha anticorrupción (ya están afilando los cuchillos). La vuelta del delincuente Fujimori estrenando centenares de nuevas geishas (ya hay varios felices postulantes) y todas las provincias del Perú confundiendo reivindicaciones con bloqueos de carreteras y disturbios. ¿Suena factible? Sí, pues.

La agenda política ideal (la del Gobierno y la de la oposición)

En mi opinión, podría resumirse en tres puntos básicos: 1) auténtica lucha contra la corrupción; 2) verdadero impulso a la educación en todos sus aspectos; y, 3) buscar maneras creativas en política económica para que no solo "chorree" (como si repartir miseria fuese un gran éxito) sino para lograr verdaderas mejoras en el nivel de vida de quienes realmente lo necesitan.

Lo terrible es que, a estas alturas de mi vida y por todo lo

que veo, estoy totalmente seguro de que no moverán ni un dedo en estos tres puntos. Nadie. El Gobierno, por razones obvias, y también porque es incapaz de avanzar medio paso sin ponerse cabe a sí mismo. Y la oposición, porque —salvo muy, muy contadísimas excepciones con apellido, y cada vez menos— solo busca el poder como botín y repartija. Todo esto lo sabemos desde siempre y suena a verdad de Perogrullo. Pero nuestros políticos ni siquiera se molestan ya en guardar las formas o 'pasar piola'. El congreso (no merece mayúsculas) lo demostró de manera clara avalando el decreto que equipara prisión domiciliaria con prisión común.

Por tanto, en vista de que, oficialmente, ya se ha implantado la cultura de la deshonestidad (*de facto*, desde 1992), pues nada más incómodo que



Diario El Comercio



la educación. Fuera del lugar común y la retórica, a ningún Gobierno le ha interesado impulsarla, jamás. En eso

coinciden con los objetivos del SUTEP: mientras más analfabeta sea la gente, mejor. Por ello, ninguno de los candidatos "con opción" dedica treinta segundos de su discurso a algo tan elemental como crear conciencia de ciudadanía. Obvio: si es lo que menos les conviene...

Respecto de la política económica, en el Perú somos más archicapitalistas que en los mismos Estados Unidos. Tanto así que en nombre de la sagrada "libre competencia" pagamos veinte veces más por los mismos medicamentos. ¿No tienes? Muérete. Salvo el mercado (de ellos), todo es ilusión. Abimael y los gurúes del darwinismo neoliberal tienen exactamente el mismo esquema de pensamiento. Y encima se escandalizan cuando uno les achaca ideología. "¿Ideología, nosotros? ¡Qué blasfemia! ¡Nuestros cargos

son puramente técnicos!". Sí, pues. Los cargos de Himmler y Goering también lo eran.

Así que la agenda ideal... es una utopía. Diccionario de peruanismos: *Utopía: Nombre de una discoteca incendiada con trágico saldo de víctimas.* Jamás un nombre estuvo tan bien puesto.

Sin embargo, no todo está perdido. El Gobierno y los políticos hacen de todo para destruir nuestras vidas... pero no lo conseguirán. Muchos ya hemos aprendido que debemos vivir, amar, escribir y disfrutar lo que podamos a pesar de ellos. Nuestro único triunfo será decirles en sus caras: no les creemos *nada*. Absolutamente *nada*. Sírvanos de payasos, que para eso les pagamos con nuestros impuestos. Muy pronto, gran temporada de circo 2006. ¡Oiga, caballero! ■

Avatares de la democracia

gonzalo portocarrero

Sociólogo, profesor en la PUCP

Las "fuerzas progresistas" han transitado de una expectativa revolucionaria a otra reformista. Se trata de un cambio doctrinario fundamental de gran impacto en el conjunto de la población. Pero resulta que, para el sentido común, la política ya no se entiende como contraposición de ideas y programas sino como luchas y acomodados entre los intereses personales de los protagonistas.

La hegemonía reformista, el consenso creciente en torno de que profundizar la democracia es lo prioritario, no se traduce en un cambio de lo político. Digamos que la democratización ha avanzado en términos de conciencia de tener derechos pero que está obstaculizada por la persistencia de las relaciones patrón-cliente que impiden la renovación de lo político. Este avance tan desigual de la democracia, la ampliación de los derechos pero la vigencia

de las jerarquías, conduce a una fragmentación de las luchas sociales. No surgen entonces imágenes de futuro que puedan entusiasmar a todos, y cada uno está en lo suyo sin que nada mejor sea realmente visible.

Las "fuerzas progresistas" han abandonado la vieja idea de que no se puede mejorar nada si antes no se cambia todo. El tránsito de la revolución a la reforma es evidente. Boaventura dos Santos ha remarcado que estas fuerzas se han apropiado de los derechos humanos como "guión emancipatorio". Hecho que no deja de ser sorprendente, por cuanto la ideología de los



Diario El Comercio

derechos humanos fue en un inicio promovida por las fuerzas conservadoras en su lucha cultural contra los regímenes llamados socialistas. En realidad, los derechos humanos no eran tomados muy en serio, pues se argumentaban o no según la conveniencia del momento. Entonces, cuando advino el colapso del bloque socialista, el progresismo suplió su pérdida de norte con el ideal de radicalizar la democracia para liberar a los individuos.

En este proceso, el progresismo se ha redefinido. El odio —y su resultado, la violencia— ha dejado de ser una motivación que pueda ser convocada con legitimidad. El revanchismo tiene que ser reprimido, no puede ser la base de la política. El deseo de justicia debe estar por delante.

Esto significa que el progresismo se depura de los "profetas del resentimiento" y, de otro lado, que suma a sus filas a la "gente de buena voluntad" dispuesta a apoyar el principio de un desarrollo humano para todos. El progresismo redefine también sus orientaciones. La lucha contra la propiedad privada y el capitalismo deja de tener sentido, pues la prioridad es ahora el cambio de la política y la cultura. En efecto, se trata de generar una noción de derechos humanos que recoja las aspiraciones de justicia y que sea cada vez más internalizada por la ciudadanía y sus representantes políticos, y que se convierta, por tanto, en fundamento de la acción estatal.

En nuestro país, la actitud progresista tiene como vanguardia el mundo intelectual y la coopera-

ción internacional para el desarrollo. Desde las universidades y las ONG se ha promovido el discurso de la ciudadanía y de los derechos humanos. Este discurso ha encontrado una audiencia expectante en el mundo popular, pues la idea de tener derechos por ser hombre o mujer es muy atractiva, liberadora de la resignación y el fatalismo. Entonces, desde esta nueva perspectiva de tener derechos, la gente excluida comienza a percibirse como "abandonada", pues constata que el Estado no cumple con sus deberes, que sus legítimas expectativas no son atendidas. Con esta nueva conciencia surge la lucha por el reconocimiento, por lograr condiciones y oportunidades que permitan ese desarrollo humano que a nadie puede

negarse. No obstante, este discurso no se divulga a título partidario, como ocurrió antes con el discurso de la revolución, capitalizado por las fuerzas de izquierda, sino como un sentido común evidente, "políticamente correcto", que toda la gente debería internalizar pues se trata de lo justo, de lo que debe ser.

Para que este discurso se realizara, lo ideal sería que existiese una ciudadanía esclarecida. Un ciudadano, dice Badiou, es alguien capaz de pensarse a sí mismo no solo como individuo con intereses específicos sino también como miembro de una comunidad sociopolítica, de una colectividad que enfrenta desafíos y que elabora una agenda de prioridades, en la que se armonizan las reivindicaciones particulares. De ahí que el ciudadano esté dispuesto a dialogar. La intransigencia no es el principio de su acción porque puede participar. La política es, entonces, el espacio donde las diferencias tienen que negociarse teniendo como horizonte común esos desafíos y esas prioridades que dan coherencia a la acción del Estado.

II

Si en la política el reformismo de los derechos humanos se ha vuelto sentido común, en la economía se han reforzado las ventajas del capital y se han debilitado los derechos laborales, como consecuencia del desarrollo tecnológico y la incorporación de inmensas cantidades de trabajadores al mercado mundial en el Asia, especialmente la China. Entonces la historia se repite en casi todas partes: las ganancias se elevan, el desempleo se vuelve perma-

nente y las remuneraciones se estancan o disminuyen.

En estas condiciones, los ojos se vuelven al Estado como garantizador de los derechos de la gente. La idea es que el Estado debería disponer del excedente económico para crear las capacidades que permitan la inclusión económica y social. No obstante, el Estado dista de ser el agente de justicia con que el progresismo sueña. En los países donde es débil el sentimiento ciudadano, los políticos se enfrentan a las demandas contradictorias de la gente. Muchos reclaman sus intereses particulares, pero casi todos quieren también orden y efectividad. Hechos que solo la vigencia de un interés general concordado por una autoridad legítima puede garantizar.

En todo caso, entre la gobernabilidad clientelista, que pocos dicen querer pero que muchos apoyan, y, de otro lado, la gobernabilidad democrática, que todos dicen querer pero pocos apoyan, los políticos tienden a preferir la primera opción. Así, la lógica particularista del arreglo bajo la mesa se impone sobre la lógica del interés general, de la conciliación transparente. Entonces, con la distribución de prebendas se consiguen lealtades —o, al menos, se sofocan conflictos—, y de esta manera se va tirando, de crisis en crisis.

Pero esta lógica hace crónico el déficit de autoridad. La sociedad es incapaz de actuar coherentemente sobre sí misma. El desgobierno se entroniza. Los medios de comunicación y la gente elaboran una visión totalmente negativa de la política que repercute en un sentido pesimismo sobre el futuro del país. El político

es definido como corrupto y narcisista. Ahora bien: esta visión desencantada funciona como una profecía autocumplida. En efecto, si los políticos carecen de una visión ciudadana, si no les importa el país, entonces, ¿qué se podría exigir de la gente común?

Como consecuencia, este estereotipo del político viene a ratificar la presunción de que somos cómplices antes que ciudadanos. Nadie puede dar cátedra de moral; todos estamos en el fango. Cada uno a lo suyo y lo demás no importa. No se trata de defender a la clase política, pero sí de señalar que el odio hacia los políticos sirve para encubrir una abdicación masiva de la responsabilidad ciudadana. Precisamente de la perpetuación de esta renuncia nace el vínculo patrón-cliente. En realidad, lo mismo se reitera en casi todas partes. Un candidato dice lo que la gente quiere oír: promesas. Le importan los votos, pero la gente le toma la palabra. Se inicia entonces una relación difícil. ¿Cumple o no cumple? Todo depende de los recursos y la capacidad de presión. Pero desde el momento en que la promesa no es un programa o doctrina, un compromiso con el interés general, la situación ya está mal encaminada, pues estamos ante un pacto personal: doy (mi voto) para que me des algo (un trabajo u obra pública). Es decir: si me consigues eso, por mí puedes hacer lo que quieras. Se renuncia a la responsabilidad ciudadana a cambio de un plato de lentejas. El avance de la democracia es, pues, muy desigual; la conciencia de tener derechos no va seguida de un asumir el protagonismo para realizarlos. ■

El fenómeno bufé

beatriz boza

Ciudadanía al Día

En matrimonios, *shows* y *bar mitzvahs* se suele observar con frecuencia cómo los asistentes se "abalanzan" sobre el bufé, atropellando al resto de comensales para no perderse una tajada de la mejor presa ni quedarse sin los dulcecitos para llevar a casa. Mientras, los mozos se esfuerzan por atenderlos cuidando el orden y la calidad del servicio, y los novios o agasajados están en su propio mundo, sin siquiera darse cuenta de lo que pasa.

Ad portas del último año de Gobierno, daría la impresión de que estamos presenciando esa dinámica pero a escala nacional. Cada vez más, muchos invitados (y varios "colados") buscan echar mano de "alguito" del erario público antes de que el banquete se acabe. Al hacerlo, no escatiman en desprestigiar a los tecnócratas cuya misión es precisamente cuidar la cosa pública.

La carretera interoceánica, por ejemplo, parece ser uno de los síntomas del *fenómeno bufé*. Aun cuando necesaria y oportuna, según los expertos la inversión propuesta no guarda proporción con el objetivo deseado. Es como financiar Rolls Royce para todos los taxistas (al estilo inglés) o coches blindados para llevar a los niños al colegio. Sería ideal, y con una ola de creciente

inseguridad ciudadana resultaría hasta oportuno, pero es totalmente desproporcionado para nuestra realidad.

Los beneficios de esta obra no justifican que el Gobierno nos hipoteque por 150 millones de dólares anuales durante los siguientes quince años cuando con ello se podría pavimentar y mantener las carreteras de penetración a escala nacional. ¡Alguien se está llevando la mejor presa del bufé a costa nuestra!

Por otro lado, para combatir la extrema pobreza el Gobierno ha anunciado el Programa ProPerú —hoy Juntos—, que aún no termina de diseñarse, por lo que nos corremos el grave riesgo de que se decida comenzar a ejecutar en plena campaña electoral y solo en zonas urbanas de la costa, cuando la pobreza extrema es mayoritariamente andina y rural. El nuevo Registro Nacional de Contratistas del Estado que ha puesto en marcha Consucode crea nuevos ingresos para esa entidad, perjudicando a las PYME, que tendrán que soportar este sobre costo para mantenerse cada año en el Registro.

Muchos también accedieron a su "alguito" del bufé con la ley que equiparó el arresto domiciliario a la prisión efectiva, o con la compra de las fragatas Luppo. Los transportistas, a su vez, no quieren asumir el costo de los

siniestros que su mal manejo ocasiona y buscan pasar el costo del SOAT a otros, alegando posición de dominio y restricciones a la competencia. ¡Y la fiesta aún no ha comenzado!

Varias entidades públicas se están apresurando a llenar todos los puestos posibles con personas "allegadas", no solo cubriendo las plazas disponibles, sino a costa de cambiar personas que han hecho carrera técnica pública, e incluso creando áreas o programas que no aportan valor. Muchos funcionarios están estableciendo normas y jurisprudencia que les permitan hacerse conocidos en la opinión pública y crearse un espacio en futuras listas electorales. También están impulsando procesos de auditoría que, aprovechando el poder que les da el cargo, buscan desprestigiar a ex funcionarios cuya voz pudiera perjudicar sus intereses personales.

La coyuntura es delicada, no solo porque algunos ya están sentados a la mesa y otros aspiran a ocupar también una silla, sino porque la mayoría de los mejores mozos y cocineros, que saben y hacen bien su trabajo, no tienen ninguna garantía de que podrán continuar. Y los novios, los ciudadanos que somos los dueños de la fiesta y quienes pagamos el bufé, solemos estar al margen de lo que sucede.

Aunque deseable, es difícil, realísimamente, imaginarse un escenario en el Perú del próximo año en el que los principales actores involucrados tengan incentivos distintos y que busquen "llevar la fiesta en paz". La propia dinámica competitiva del proceso electoral, con voto preferencial y elección por distrito múltiple, sumada a la falta de institucionalidad de nuestro aparato estatal, hacen del fenómeno bufé una realidad en nuestro medio.

Asumir y entender esa lógica, sin embargo, no significa que no podamos hacer nada al respecto. En un banquete matrimonial, lo único que apacigua a los voraces comensales y encauza su avidez por llevarse "su" tajada es el reflector del camarógrafo. A escala nacional, ese reflector es la transparencia.

Hoy más que nunca debemos impulsar mecanismos de transparencia que echen luz sobre la utilización y destino de los recursos del Estado, de la misma manera como resulta más necesario que nunca que cuidemos a la tecnocracia para que el apetito político no arrase con todo el bufé. La transparencia es un poderoso antídoto contra el mercantilismo y la corrupción y ayuda a que los ciudadanos nos informemos, participemos y hagamos valer nuestros derechos.

En esa línea, deberíamos exigir que todas las entidades públicas informen a la ciudadanía toda acerca de su gestión antes de fin de año y que el año entrante rindan cuenta antes del cambio de Gobierno. Obviamen-

te, no todos los actores serán adeptos a ello, pero se puede tener buenos aliados. Mientras que los comensales más aguerridos del Poder Ejecutivo y aquellos que ya echaron mano a la mejor presa buscarán meterle cabe al camarógrafo y esconderse detrás de él, los congresistas, los futuros candidatos, la prensa y los organismos de vigilancia ciudadana tienen mucho que ganar con más transparencia.

Así, pues, el presidente Toledo se luciría si propusiera, este 28 de julio, que la ejecución del presupuesto de su último año de Gobierno sea consensuada con la orientación del Acuerdo Nacional y que no tomará decisiones que comprometan la viabilidad del próximo periodo. El anfitrión debe cuidar el bufé, y nosotros, los ciudadanos, somos los primeros interesados en que lo haga. ■

Revista Caretas





Ajústense los cinturones de seguridad

maría isabel remy

Investigadora del Instituto de Estudios Peruanos

No hemos tenido buenos "últimos años" de nuestros gobernantes desde la transición democrática de 1980. Fernando Belaunde terminó su segundo mandato con niveles muy bajos de aceptación, protestas sociales en un marco de quiebra de empresas y recesión, y una espiral de violencia política que arrasaba vidas y pueblos.

Alan García, luego de un inicio expectante, terminó su mandato con ínfima aceptación, conflicto social, inflación y terrorismo galopantes; junto con el desgobierno, evidencias de corrupción, de descomposición moral, de utilización de bienes públicos en beneficio

privado o partidario, liquidaban la confianza ciudadana en la política y los partidos políticos.

La estabilidad autoritaria de la década fujimorista, con alto gasto público para ganar adhesiones particularmente en años electorales, llegó también a un último año con una aceptación por los suelos, recesión económica, escándalos de corrupción nunca antes vistos y crecientes protestas sociales.

Asusta acercarse al último año de Toledo.

En nuestro marco institucional, dos procesos tienden a desesta-

bilizar el "último año". Uno se genera en la propia clase política, en la que las autoridades electas o los altos funcionarios del Gobierno que termina tienen la tentación de utilizar la escena pública (o los bienes públicos) para levantar su imagen en el electorado o, perdida la esperanza de un posible futuro político cercano, "hacer caja" para su futuro personal.

Si bien lo último por lo general cae en el terreno de los delitos de corrupción,¹ todo lo que lleva a "levantar la imagen pública" pue-

¹ No siempre evidentes; muchas veces escondidos tras los *lobbying*.

de alentar declaraciones, actitudes, proyectos y hasta promulgación de leyes dirigidas a satisfacer determinados "nichos" electorales, dejando terrenos minados y cuentas por pagar al siguiente Gobierno.

Ya hemos empezado a ver en el Congreso propuestas de leyes de alta irresponsabilidad, como el reconocimiento de las municipalidades de centro poblado, o la entrega del mercado de Santa Anita a sus invasores. Y en el Ejecutivo: cambios de discurso de connotados personajes del régimen, anuncios de una preocupación —cuando menos tardía— por la pobreza, etcétera. Para mayor inestabilidad, a todo ello se suman los que abandonan el barco antes de que se hunda y se lanzan a la búsqueda de nuevos aliados y nuevos electores.

Estas actitudes de gobernantes y congresistas, mal llamadas populistas, abren oportunidades para la segunda fuente de inestabilidad: las protestas sociales. En el contexto de divisiones en el grupo de Gobierno y de congresistas a la caza de electores, se incrementa la posibilidad para los grupos menos favorecidos de encontrar aliados en las élites políticas, obtener beneficios adicionales o lograr reivindicaciones postergadas. Pero también abren oportunidades a influencias oscuras, menos públicas; en el hecho de incluir a debate, sin acuerdo de comisiones, una ley como la que permite contabilizar la detención domiciliaria como prisión efectiva, e inhibirse de observarla, puede haber todo tipo de influencias, intercambios, "favores" sobre personajes públicos que están de salida.

El escenario más probable del último año del presidente Toledo

es el de la exacerbación de estas fuentes de inestabilidad, probablemente a niveles mayores que en otros, porque los mínimos elementos de campaña electoral ordenada que podría conservar el régimen político no funcionarán. No funcionará el control autoritario-mafioso. Las elecciones fujimoristas jugaban a la reelección y el Congreso estaba controlado por una mayoría —electa o comprada—; el uso de bienes públicos y la capacidad de legislar estaban en cierto modo controlados por la mafia de Gobierno, de manera que el último año aceptaba con dinero público el aparato reeleccionista, pero ni dejaba un terreno minado ni cuentas por pagar para el siguiente periodo, ni los congresistas de la mayoría tenían el terreno libre para inventar estrategias personales de reelección.

Pero tampoco funcionará el mínimo de control de las expectativas políticas de futuro. Perú Posible no será reelegido para gobernar, y es probable que si mantiene alguna presencia en el Congreso esta sea mínima; como "marca" no tiene futuro político para más adelante, y nadie requiere preservarla. En la mayoría de sus congresistas o altos funcionarios, no hay futuro que preservar: todo lo que obtengan será en el "corto plazo": no funcionan los mecanismos de "preservación de la clase política"; es el último año de unos *outsiders* que volverán a serlo.

Así, el riesgo mayor de este "último año" no es, pues, el uso de recursos públicos de fondos o programas sociales "a lo Fujimori", aunque lo habrá sin duda para tratar de mantener un

mínimo espacio en el Congreso. Los riesgos mayores son de corrupción en sus diferentes variantes y los de utilizar las facultades legislativas, sea para obtener el apoyo de "nichos" electorales, sea para otorgar "favores" privados.

El escenario de "último año", en realidad, no tendría por qué ser mejor. Nuestro sistema político no ha sido reformado. Al voto preferencial, uno de los factores principales de privatización de la política, herencia de la transición de 1980, se ha sumado todo el montaje desinstitucionalizador de la Constitución de 1993, íntegramente vigente (Parlamento unicameral, nombramiento de altas autoridades judiciales y electorales por mecanismos corporativos, etcétera), así como varias "iniciativas" del Gobierno actual (desmontaje del sistema anticorrupción, copamiento del Estado por individuos incompetentes y sin identidad política partidaria).

Qué se puede esperar. Quizá podría haber dos fuentes de control de este escenario. Una, las dirigencias de partidos políticos más orgánicos (los que no son federaciones de candidatos) que pretendan gobernar sin tener que pagar las cuentas que deje pendientes la "fiesta" electoral. Es poco, sin embargo, en condiciones de voto preferencial, lo que puedan hacer para controlar iniciativas de sus candidatos. Acaso algo de seriedad pudiera esperarse si, efectivamente, se organizaran elecciones primarias, aunque ellas funcionarían como filtros solo si el escenario de partidos se ordena a través de alianzas. Actualmente, con más de treinta organizaciones políticas inscritas en el Jurado Nacio-

nal de Elecciones o a punto de lograrlo, organizar con seriedad elecciones primarias para más de 3 mil candidatos al Congreso puede ser imposible (en realidad, irrisorio). La probable postergación del calendario para la inscripción de alianzas políticas contribuye a desordenar el escenario.

Otra fuente de control podría ser un arranque de responsabilidad —aunque tardío— de algunos congresistas con trayectoria política propia, sin vínculos con la corrupción (la honestidad también existe) que han anunciado

que no postularán a una nueva reelección. Iniciativas legislativas o de denuncia, de control desde dentro en el Congreso, podrían colaborar a impulsar un debate público que ponga en evidencia la necesidad de reformas; pero son minoritarios.

No mucho más. No parece ser el momento de movimientos cívicos, ni tendrán mucho peso iniciativas de ciudadanos para que se suscriban "pactos" entre candidatos (el propio Presidente mostró la poca importancia que

se puede dar a su propia firma en campaña). La misma iniciativa de que organizaciones ciudadanas ausculten los *curriculum vitae* de los candidatos puede ser imposible habiendo miles de ellos, o puede conducir a "cazas de brujas". Personalmente, creo que tendremos un año difícil y que dentro de cinco años será igual, si el país no emprende un camino de reforma del sistema de representación política. Es más o menos evidente, aunque no siempre se recuerda, que si se quiere que las cosas sean diferentes, hay que introducir cambios. ■

La inestable estabilidad de ser peruano

eduardo CÁCERES

Filósofo

¿Cómo así fue posible que Toledo culminara su mandato? Más de una tesis o seminario de ciencia política podría llevar este título en el futuro. A pesar de una consistente desaprobación que ha bordeado el 80 por ciento durante varios años, todo parece indicar que la banda presidencial pasará al sucesor que se elija en apenas nueve meses. Varios de sus colegas no tuvieron igual suerte: Gutiérrez —en el Ecuador— no pudo sobrevivir a la movilización de quienes él llamara "forajidos". Sánchez de Losada y Mesa —en Bolivia— tampoco pudieron cerrar el periodo para el que fueron elegidos. Y al menos este último mantuvo un índice de apoyo que triplicaba el del Presidente peruano.

En una región marcada por tal inestabilidad, la *performance* de Toledo bien puede ser vista como un logro. Algo así como la prueba de que nuestra institucio-

nalidad democrática trasciende la mediocridad de alguno de sus protagonistas.

Sin embargo, cuando se examinan los índices de aprobación de otros pilares de tal institucionalidad (Parlamento, Poder Judicial, etcétera) es imposible mantener tan benévola interpretación.

Al otro extremo del abanico interpretativo, podría postularse la tesis de que la supervivencia del gobernante se explica justamente por la precariedad de la institucionalidad vigente, por la ausencia de liderazgos y propuestas alternativos. Si bien la tesis tiene algo de cierto, falla en lo central: no explica por qué, a pesar de todo, algunos ámbitos de la vida nacional han avanzado de manera imperturbable: inversiones, utilidades y exportaciones han batido récords históricos. Sin duda, esto no sucede en "estados fallidos".

A veces las paradojas develan las fallas de nuestras teorías y exigen modificarlas. En este caso es evidente que nuestra manera de entender el poder y la política en el Perú tiene gruesas fallas. En primer lugar, porque supone que se mantiene una clara identidad entre poder y Estado; en segundo lugar, porque asume que este último es, en lo fundamental, un conjunto de instituciones más o menos democráticas. Por último, y esto es lo más dramático del problema, porque supone que la mayoría de peruanos compartimos una consistente "lealtad democrática".

La diferencia entre poder y Estado no es nueva. Antes de que se hablase de poderes fácticos u ocultos, se hablaba de "instituciones tutelares de la Patria". Aunque la función de algunas de estas pareciera estar debilitada, otras "instituciones" (en el sentido más amplio del término) han asumido funciones más que de "tutela" del Estado; por ejemplo, en el manejo de las palancas fundamentales de la política económica. Es impresionante la continuidad de los nombres que rotan entre cargos en el MEF y otros ministerios de

la producción, asientos en el BCR, "pasantías" por los organismos financieros, etcétera.

¿Afecta en algo esta continuidad "institucional" el generalizado desprestigio de los poderes formales del Estado? Muy poco. Entre otras razones, por la existencia y funcionamiento de prácticas de representación, intermediación, conflicto, negociación, arreglo, etcétera, que fluyen por fuera de la (desprestigiada) institucionalidad estatal. Cuando los vecinos de un barrio de clase media o alta temen por su seguridad, plantan su reja y contratan seguridad privada. Los vecinos del barrio pobre arman su ronda, detienen y castigan por cuenta propia. Cuando un grupo empresarial tiene problemas o requiere algún apoyo, le basta con levantar un teléfono con número de tres dígitos. Por su parte, los pobres toman la carretera hasta que alguien los llame desde un teléfono similar. Los ejemplos podrían continuar.

En términos generales, podríamos afirmar que la crisis endémica del Estado peruano ha comenzado a tener resoluciones precarias en la proliferación de "acuerdos particulares" o "contratos privados" en ámbitos que, al menos en la teoría, eran vistos hasta hace poco como parte del "contrato social". Ejemplo privilegiado de esto es lo que sucede alrededor de centros de explotación minera, petrolera o gasífera. Urgidos por la penuria, cuya principal causa está en la ausencia de Estado, los pobladores reclaman a la empresa privada que los provea de fondos para el gasto social y el desarrollo. Tras acciones de fuerza, diálogo y negociaciones, los fondos comienzan a fluir de manera limitada. Sin embargo, las limitaciones institucionales —incluyendo la corrupción— dificultan la eficacia del acuerdo. Frente a ello, hay que dejar de lado a municipios,

gobiernos regionales y Estado. La reciente propuesta de PPK cierra el círculo: que las propias empresas administren parte de los fondos del canon o regalías.

Pocos se han puesto a pensar qué consecuencias podrá tener esta lógica de acuerdos particulares cuando las utilidades de las empresas declinen por una u otra razón. O qué pasará con aquellas poblaciones que no usufructúan la ventaja comparativa de tener algún gran contribuyente privado en su vecindario.

No hay duda de que la dinámica reciente del conflicto social, incluso en sus expresiones más radicales, ha estado dominada por la lógica de lograr mejores "acuerdos particulares". Compárense los conflictos en torno de recursos extractivos en el Perú con *el conflicto* (en singular) en Bolivia, y se entenderá por qué allí cayeron dos presidentes (por razones bien diferentes en cada caso, por cierto) y aquí ninguno.

En este marco, las lealtades y agendas de la población no son difíciles de auscultar, aun cuando las fronteras sean difusas y las posibilidades de mixturas, múltiples. La agenda de la supervivencia entre los más pobres; la del progreso entre quienes escapan

del grupo anterior; la de la prosperidad entre el reducido estrato de propietarios y profesionales exitosos. Difícil pensar que se articulan —o se podrían articular— en una o varias agendas nacionales. Muchas veces la supervivencia es a costa de quienes quieren progresar (informalidad, caos urbano, etcétera) y viceversa (trabajo informal, discriminación, etcétera). Entre tanto, la prosperidad se mantiene en cotos cada vez más cerrados.

Preguntar a peruanos y peruanas por sus convicciones democráticas no tiene mucho sentido en este marco. Las respuestas explícitas seguramente serían "políticamente correctas" en la mayoría de los casos (aun cuando ya hay cerca de 30 por ciento "sinceramente" no democrático). Las respuestas hay que leerlas en las prácticas vigentes. Y es ahí donde la democracia pierde, en la mayoría de los casos, frente a diversos argumentos: seguridad, en muchos casos; competencia sin restricciones, en algunos; redistribución, como sea y ahora, en otros.

El desafío de los próximos nueve meses está en el terreno de intentar articular estas agendas. En caso contrario, quién sabe si podremos repetir otro quinquenio de inestable estabilidad. ■

Revista Caretas

